

EL ROL A DESEMPEÑAR POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. EL CASO DEL PERÚ

Fernando Varela Bohórquez*

Por la gentil invitación del profesor Eduardo López Ahumada, el 04 de setiembre de 2020 participé en el seminario de investigación “Nuevas formas de trabajo y economía informal” organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – IELAT de la Universidad de Alcalá y la Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba.

En este breve documento buscaré plasmar un resumen de lo expresado en aquella oportunidad en la que, conjuntamente con destacados especialistas del Derecho del Trabajo de Iberoamérica, analizamos el fenómeno de la informalidad y, desde mi punto de vista, el rol que debería desempeñar la Inspección del Trabajo en mi país.

Las cifras que reflejan el porcentaje de informalidad laboral en la población económicamente activa en el Perú no pueden ser calificadas de otra forma que intolerables, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ya en el año 2018 el empleo informal involucraba al 72.4% de la población total que trabajaba.

Si de por si la estadística oficial resulta suficiente para determinar de forma rotunda el problema que nos aqueja como país, este resultado no ha tenido en cuenta dos indicadores adicionales, el primero de ellos es el proceso de inmigración irregular por la que ha atravesado el Perú (y ciertamente América Latina) y el segundo de ellos, el fenómeno del desempleo laboral producto de la pandemia por el Covid - 19, desempleo que se fundamenta por la pérdida real del empleo y/o por las suspensiones de relaciones laborales que se vienen permitiendo en tanto dure la crisis sanitaria. Dos indicadores que, tristemente, incrementan ese resultado en cifras ya cercanas al 90 % de informalidad laboral en el Perú.

* Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Director del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Director de Actualidad Laboral

En el caso de los trabajadores inmigrantes, la informalidad laboral es muchas veces el camino que deben seguir para poder sobrevivir en un país ajeno al suyo, sin que importe emplearse en puestos de trabajo básicos o que no tienen relación con su calificación profesional, debemos tener en cuenta que según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el Perú actualmente han inmigrado más de 830 mil ciudadanos venezolanos, lo que ha generado, adicionalmente, el incremento desempleo juvenil y, claro está, mayor informalidad en el empleo.

En relación al desempleo como producto de la crisis económica a la que nos ha llevado la pandemia, queda por decir que ante la ausencia de un empleo, el camino no entiende de relaciones formales si es que el objetivo principal es la subsistencia.

Ante el escenario descrito cabe preguntarse que papel desempeña la Inspección Laboral en el Perú y la respuesta, lamentablemente, tampoco es auspiciosa, ya que a la actualidad nuestro país cuenta con 821 inspectores, entre los que tenemos que dividir entre Supervisores Inspectores, Inspectores de Trabajo e Inspectores Auxiliares, los mismos que deben fiscalizar más de 16 millones de relaciones formales e informales.

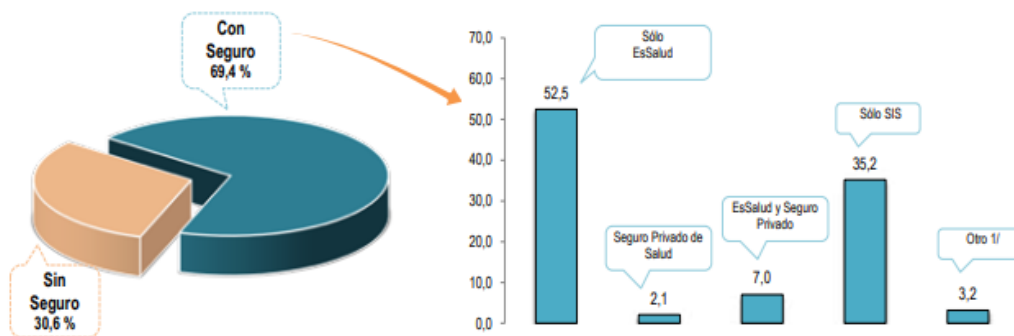
Por ello, existe la percepción de que se renuncia a la inspección de los informales y se opta por, en la mayoría de los casos, a inspeccionar y reinspeccionar a las empresas que cumplen, muchas veces a duras penas, con respetar sus obligaciones socio laborales.

Otra pregunta adicional sería, el mercado laboral peruano es notoriamente informal por ausencia de legislación y la respuesta es negativa, el problema no es que no exista una legislación aplicable, el problema de las falencias en la informalidad en el empleo es la ausencia de voluntad del gobierno (sucesivos por cierto) de entender que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral debe ser dotada de mayor recurso humano y de infraestructura que les permita cumplir con su labor, lo cierto es 821 inspectores es una cifra heroica para aquellos servidores que día a día dan sus máximos esfuerzos para poder cumplir su rol de inspectores, pero es una cifra de vergüenza para quienes dirigen el rumbo de nuestro país.

Estas cifras se recrudecen más si lo comparamos con la cantidad de personas que debido a la informalidad no tienen acceso a la Seguridad Social, según el INEI de las 3 millones 611 mil 300 personas ocupadas de Lima Metropolitana, el 69,4% (2 millones 506 mil 800 personas) tienen seguro de salud; mientras que el 30,6% (1 millón 104 mil 500 personas) no disponen de este beneficio.

Asimismo, en los meses de junio, julio y agosto de los años 2019 al 2020, la población ocupada con seguro de salud disminuyó en 24,3%.

Por lo que concluye que, del total de ocupados con seguro de salud, el 52,5% tiene exclusivamente seguro de EsSalud, el 35,2% el Seguro Integral de Salud (SIS), el 7,0% cuenta con EsSalud y Seguro Privado, el 2,1% tiene Seguro Privado de Salud y el 3,2% tiene SIS y Otros Seguros de Salud, mientras que el 30,6% que representa 1 millón 104 mil 500 personas, no disponen de acceso al seguro social.



La informalidad en el Perú no solo genera la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, sino también ataca su derecho constitucional a la Seguridad Social; situación que resulta alarmante en época de pandemia.

También existe una ausencia de dirección, de planeamiento y de estrategia, los mismos que se deben resumir en un plan de acción para los próximos 10 años, en los que se establezca que la dotación de más recursos deben ir dirigidos y acompañados a resultados que tengan como objetivo la determinación de las relaciones informales de al menos de 80% de procedimientos inspectivos.

En definitiva ante un gran problema lo lógico es que se puedan aportar muchas de solución, pero todas ellas siempre tienen que pasar por el filtro de la decisión de los gobernantes que, lamentablemente, aun no se percatan que apostar por la formalidad es la mejor manera de combatir todo tipo de crisis sociales.